

Pobreza y Modernización:

# ¿UN PAÍS QUE COMIENZA A MIRAR DESDE ARRIBA?

*• Si bien el ajuste económico que vivió nuestro país durante el gobierno militar fue relativamente exitoso desde el punto de vista de la recuperación de la crisis, es un hecho que no contribuyó a superar la pobreza. Trabajo Social tiene mucho que decir al respecto: hay que indagar en lo específico de la pobreza y, desde allí, elaborar propuestas de solución.*

En un sinnúmero de ámbitos intelectuales y políticos, e incluso en la vida cotidiana de muchos chilenos, impera la convicción de que nuestro país se encuentra encaminado en un proceso irreversible que nos conducirá, más temprano que tarde, por la senda del desarrollo y del progreso histórico y que nos

dejará situados entre las naciones ricas y exitosas. Para ello se alaba la actual estrategia de desarrollo, así como se resaltan los logros económicos experimentados en la última década, luego de la crisis de 1982. En ello hay consenso tanto para los defensores del extinto gobierno militar, así como para los que han encabezado los gobiernos de transición democrática.

Dentro de esta lógica exitista, que plasma a prácticamente la totalidad de los ámbitos informativos y que inunda las conversaciones, opiniones y comentarios del chileno medio, se encuentran también respuestas apropiadas para la constatación de ciertos problemas del país, entre los cuales se cuenta, de modo privilegiado, el tema de la pobreza, realidad que alcanza hoy en día a una cifra superior al 30% de la población.

## MARICELA GONZALEZ

Asistente Social,  
Licenciada en Ciencias Sociales, ILADES,  
Universidad Gregoriana de Roma.  
Docente Escuela de Trabajo Social,  
P. Universidad Católica de Chile.

Sin embargo, el modelo aparece como la mejor estrategia para derrotar tanto éste como cualquier problema que se le presente al conjunto de la sociedad, y se marcha confiado en que estamos en presencia de la mejor estrategia posible de desarrollo, a la cual hemos

llegado como resultado de una especie de despegue cultural, o bien de la evolución propia del pensamiento y de la civilización de la sociedad chilena.

De esta manera, y desde la defensa del modelo que impera en la economía y en la conducción de la sociedad, los pobres aparecen como aquel sector que no ha logrado incorporarse efectivamente a la estrategia de modernización de Chile y, por lo tanto, es visto como una especie de mal menor que será erradicado en cuanto los frutos del modelo se comiencen a expandir desde los estratos más avanzados hacia los más empobrecidos.

La lógica argumentativa de estos planteamientos descansa en la convicción de que la pobreza es, en definitiva, un fenómeno marginal al modelo

de desarrollo y que ambos momentos (crecimiento y pobreza) se encuentran aislados entre sí. Incluso, cuando se habla de reparar los costos o de saldar la deuda social que dejaron los procesos de reducción del aparato estatal o de transformación en la orientación de las políticas sociales impulsadas por el régimen militar, el pago se propone como un descuento a realizar en el saldo de los frutos del crecimiento, que resulta ser la prioridad para otros ámbitos, como es el mismo caso de las políticas sociales.

Retomar la lógica a través de la cual se sostiene esto, es el objetivo principal de este artículo, así como reflexionar acerca del tema desde la perspectiva del Trabajo Social, entendiendo que ésta es una temática privilegiada que ha guiado gran parte de nuestras intervenciones profesionales, y que en el futuro deberá constituirse en un ámbito también de reflexión y de producción de conocimiento.

### **Un país que comienza a mirar desde arriba**

El modelo de sustitución de importaciones tuvo vigencia en nuestro país hasta los comienzos del gobierno militar. Desde ahí en adelante se le dio un curso completamente distinto al país, privilegiando el cambio económico como manera de revertir la opción proteccionista y estatista que imperaba hasta el momento.

En este proceso, confluyeron a lo menos dos tipos de factores. Por un lado, los errores teóricos y de política económica de que adolecía la antigua estrategia de desarrollo; y, por el otro, la arremetida conservadora y su éxito avalado bajo el alero del gobierno militar, que vio la necesidad de que los cambios políticos estuvieran sustentados en una transformación de la dirección económica del país.

Con una orientación neoliberal, desde 1973 en adelante se inicia en nuestro país el conjunto de transformaciones que tendrían su punto cúlmine en el «Plan de Modernizaciones» que impulsó el gobierno para la década de los '80, sellando la oleada de privatizaciones y liberalización permanente de las estructuras económicas.

El modelo tuvo sus serios reveses con la crisis

de 1982, pero ellos sirvieron, sin duda alguna, para intensificar aún más las políticas neoliberales y, al amparo del FMI, dirigir el curso de nuestro país hacia una economía volcada al exterior y basada en las exportaciones, y la mantención del pago puntual de los intereses de la deuda externa.

Esta nueva estrategia de desarrollo estaba guiada por tres principios fundamentales:

- a) La internacionalización de la economía, otrora desechada como causa central del subdesarrollo, era ahora reivindicada como pilar de la esperada modernización de la sociedad.
- b) La distribución de los ingresos y la equidad social dejan de ser vistas como metas de la planificación central y pasan a ser concebidas como el resultado natural del crecimiento económico global del país.
- c) El Estado como motor del desarrollo es reemplazado por el mercado, y los intereses privados como garantes de un mejor desempeño y una más eficiente toma de decisiones. El Estado queda relegado al rol de mantener los equilibrios macroeconómicos para que la economía pueda funcionar, a la vez que debe resguardar un nivel mínimo de gobernabilidad que asegure a la economía la posibilidad cierta de estabilidad.

Estos elementos se han emprendido en el esfuerzo de convertir a Chile en un país moderno, de tal manera que lo que en un comienzo fue entendido como un conjunto de políticas económicas destinadas a solventar los estragos de la crisis de 1982, quedó pronto convertida en el modelo de desarrollo que tendría nuestro país en el largo plazo. La seriedad con que esto fue promovido, los éxitos del modelo en términos de ciertos indicadores económicos, junto con la inexistencia de una oposición política que se levantara contra ello (dada la pervivencia de los militares en el poder) fueron generando la convicción nacional de que estábamos en presencia de la mejor alternativa para derrotar al subdesarrollo, hasta el punto de que hoy en día intentamos situarnos como los nuevos tigres de América Latina, en la perspectiva de un país que

comienza a mirar desde arriba.

En función de esta misma lógica, cualquier afán político que señale la necesidad de mejorar la redistribución interna de los ingresos, es tachada inmediatamente como populista, en el sentido de que toda política expansiva, que en el corto plazo pueda significar un mejoramiento en los niveles de ingreso de la población, conduce inevitablemente a un empeoramiento de los niveles de vida, puesto que en el largo plazo redundará siempre en aumentos inflacionarios y en crisis económicas. Por ello, se dice que la mala ideología debe ser reemplazada por un mejor realismo económico. La economía pasa a ocupar un puesto privilegiado y es el criterio, por excelencia, que prima en el nivel del debate público. En Chile, la suma de estos factores de cambio en las concepciones económicas encontró un excelente punto de apoyo en el gobierno militar, y éste fue el encargado de darles una implementación práctica en toda la radicalidad de sus expresiones. Y es más: el gobierno de la Concertación Democrática debió incorporarlos a su discurso político y programático como única forma de transar la posibilidad de una retirada de Pinochet y el paso a un gobierno de transición democrática.

Hoy en día, la estrategia de desarrollo neoliberal, suavizada por los epítetos de equidad o sustentabilidad ambiental, nos recuerda que el modelo es el mismo y que el conjunto de transformaciones sociales, económicas y políticas, siguen una dirección clara y ya trazada. Como sostiene el gobierno de la Concertación: «La estrategia de desarrollo del Gobierno postula la mantención de una economía abierta, y el logro de objetivos sociales en un marco de eficiencia y de estabilidad de la política macroeconómica, sin perturbar los equilibrios del presupuesto fiscal, de balanza de pagos y del sistema de precios».

En el año 1990, se estimaba que «al asumir, el

nuevo gobierno enfrenta una tarea no trivial: demostrar que la democracia no genera caos económico. Esto significa que debe moderar y atenuar las presiones sociales y mantener los equilibrios macroeconómicos. Esto implica que las restricciones de corto plazo adquieren una alta prioridad; el balance del presupuesto fiscal y el control de la inflación se constituyen en mecanismos centrales para lograr el equilibrio macroeconómico».

### ¿UN PAÍS QUE COMIENZA A MIRAR DESDE ARRIBA?

En contra de los argumentos señalados anteriormente, lo que sostenemos en estas páginas es que el modelo de desarrollo de nuestro país obedece a causas más complejas e históricamente situadas que una simple iluminación finisecular

con la que hemos dado evolutivamente. Muy por el contrario, la estrategia de desarrollo está estrechamente relacionada con un conjunto de factores sociales y políticos que han señalado que sea éste y no otro el camino a seguir.

En primer lugar, y como ya lo hemos indicado anteriormente, el modelo fue impuesto en un

contexto autoritario que allanó el camino para que sus costos no tuvieran las repercusiones sociales de protesta y descontento que son propios de un sistema democrático.

En segundo lugar, estuvo fuertemente condicionado por la política de los organismos económicos internacionales, que impusieron como camisa de fuerza para los países latinoamericanos el pago puntual de la deuda externa, hecho que sólo podía efectuarse si se mejoraban los déficits en cuenta corriente, es decir, dando auge a las exportaciones, reduciendo los niveles de inflación y eliminando los déficits fiscales a través de una reducción del gasto social, todo ello encuadra-

*«Cualquier afán político  
que señale la necesidad  
de mejorar la  
redistribución interna de  
los ingresos, es tachada  
inmediatamente como  
populista».*

do en la mantención de los equilibrios macroeconómicos.

Por último, fue también condicionado por el desarrollo de la economía internacional y su tendencia hacia la internacionalización de los intercambios, así como a la adopción de estrategias más liberales de desenvolvimiento.

Sin embargo, este conjunto de condicionantes no nos pueden hacer olvidar el hecho de que la adopción del modelo tuvo también fuertes costos, tanto en el plano económico como en el social.

Los costos del ajuste estructural fueron muchos y de gran magnitud. La envergadura de sus consecuencias ha llevado a sostener que el ajuste no hubiera podido ser implementado si no hubiera existido en el poder un gobierno dictatorial que soportara y acallara el descontento generado por una tasa de desempleo que se mantuvo sobre el 24% durante cuatro años, o una contracción de los salarios reales cercana al 20%, manteniéndose deprimidos durante cinco años, lo que además estuvo descompensado por una reducción del gasto social de un 20% durante la década.

En términos exclusivamente económicos, podemos hablar de dos grandes efectos de la aplicación de la estrategia: la camisa de fuerza para el país, producto del pago de la deuda externa, y los efectos en el ámbito del trabajo.

En efecto, las elevadas tasas reales de interés, la gran magnitud de la devaluación real, la profunda recesión económica y la repentina contracción del crédito externo durante la década de los '80, produjeron serios problemas de solvencia al sector productivo y financiero. Los deudores en moneda extranjera y nacional no estaban en condiciones de hacerse cargo de su endeudamiento, y la banca comercial comenzó a acumular una creciente cartera vencida e incobrable. Producto de ello, el Banco Central se transformó en la

entidad que asumió el rol de prestamista en última instancia, proporcionando un flujo continuo de liquidez para evitar el colapso del sistema financiero y productivo. Además, el Banco Central asumió el rol adicional de rescatador de deudores.

Esta política de hacerse cargo de la deuda del sector privado estuvo fuertemente condicionada por dos tipos de factores: como ya lo hemos señalado, por las presiones del FMI, en el sentido de cumplir oportunamente con el servicio de la deuda para obtener el crédito internacional; y, por la otra, por la existencia en el país de un régimen autoritario que, apoyado por los grandes propietarios, mantuvo un sesgo eminentemente clasista en su política, privilegiando a los sectores económicos dueños del capital.

La segunda gran consecuencia del ajuste fue en términos del sector laboral y, en este sentido, decimos que la gran válvula de ajuste fue el mercado del trabajo. En efecto, las principales consecuencias de las políticas de contracción del gasto interno fueron el elevado incremento del desempleo y la severa reducción de los

salarios reales. El desempleo efectivo estuvo sobre el 24% durante cuatro años consecutivos y alcanzó un máximo de 31,3% en 1983.

Junto con la devaluación, se eliminó la indexación salarial; las autoridades económicas implementaron una disposición especial orientada a la reducción de los salarios nominales, provocando la caída de los salarios reales, lo que según la argumentación neoclásica, produciría una disminución de la cesantía.

El salario real promedio se redujo casi un 20% y estuvo deprimido por un período largo; el ingreso mínimo líquido se redujo en un 40%. El desempleo afectó en mayor medida a los sectores de menores ingresos; más del 50% de los desocupados pertenecían al grupo de 20% de

*«La envergadura de sus consecuencias ha llevado a sostener que el ajuste no hubiera podido ser implementado si no hubiera existido en el poder un gobierno dictatorial».*

menores ingresos. Para solventar la situación se crearon programas de empleo público (PEM y POJH), para canalizar subsidios de cesantía.

En síntesis, podemos decir que el ajuste de la economía chilena de los años '80 fue necesario, en virtud de que la mantención de los déficits comerciales se hacía insostenible desde todo punto de vista. El ajuste chileno fue un proceso relativamente exitoso si lo miramos desde el prisma de la recuperación de la crisis experimentada por el país, en tanto fue capaz, efectivamente, de reducir la inflación y mejorar ciertos indicadores gravemente deprimidos.

Si porfiamos en prescindir de cualquiera consideración redistributiva histórica, la economía chilena efectivamente ha experimentado un mejoramiento de su estabilidad y solvencia internacional, siempre que nos enmarquemos en el período de tiempo que media entre el cambio de la estrategia económica para el país y el momento actual.

Empero, recuperarnos de la crisis no fue precisamente producto de que el modelo económico haya sido certeramente fructífero desde sus orígenes; por el contrario, fueron los mismos errores cometidos durante los primeros años de su aplicación, lo que condujo a que el país estuviera muy mal parado para enfrentar la crisis económica internacional, y sólo una política económica acorde con las exigencias de los organismos multilaterales pudo contribuir a su superación.

No estamos diciendo con esto que la supervivencia del antiguo modelo desarrollista hubiera podido ser una mejor fórmula de salida y no habría implicado las consecuencias que trajo, pero la hipótesis contraria tampoco está confirmada.

El ajuste estructural en Chile se había comenzado a aplicar desde 1973 y, por lo tanto, el camino recorrido en lo que va desde entonces no se

presenta, de manera alguna, como una pendiente que nos conduce de manera directa al desarrollo. Muy por el contrario, las preguntas que hoy podemos hacerle al modelo aparecen como legítimas dudas para una estrategia que quiere postularse como la vía regia e indiscutible señal de que el país por fin se ha ganado el derecho de situarse entre los grandes de la economía internacional.

En efecto, los costos del ajuste han sido también sumamente elevados, y la principal fuente problemática lo constituyó el tratamiento discriminatorio entre los diferentes agentes económicos. Las autoridades tuvieron un claro sesgo recesivo proporcionando subsidios especiales y cuantiosos a los deudores en moneda extranjera

y nacional, y subsidios reducidos o nulos a un porcentaje importante de los desempleados, por lo cual éstos se vieron en la obligación de establecer estrategias alternativas de sobrevivencia.

Aún en la actualidad, las dos piedras de toque de la estrategia económica siguen siendo el bajo nivel de aumento de la productividad media y la persistente vulnerabilidad que sigue teniendo el país,

abierto al comercio exterior, respecto de las variaciones en el mercado internacional.

Pero también la gran promesa del modelo neoliberal era reducir, producto del crecimiento económico, los niveles de pobreza existentes en nuestra población. A través de la apertura a los flujos internacionales de capital, la ampliación de las garantías al capital extranjero y local y el aumento de las privatizaciones de los servicios y empresas públicas, pretendía que el crecimiento global de la economía actuara con su efecto de chorreo desde los sectores de punta hacia el estrato más pobre de la población. De hecho, en la actualidad se sostiene que si en los últimos cinco años los indicadores sociales han muestra-

*«Las dos piedras de toque de la estrategia económica siguen siendo el bajo nivel de aumento de la productividad media y la persistente vulnerabilidad que sigue teniendo el país, abierto al comercio exterior».*

do alguna mejoría, esto ha sido gracias a los frutos del crecimiento. Pero lo que se olvida con ello es que esos mismos indicadores todavía no alcanzan los niveles de los años '60.

El problema es que este efecto automático del sistema económico todavía no se produce. Por un lado, subsiste la pregunta sobre si el mejoramiento de los indicadores económicos puede hacerse a costa del empeoramiento de las condiciones de calidad de vida de un sector de la sociedad. Por el otro, y si es que confiamos en que ello sea solventable en el mediano plazo, todavía mantenemos la duda de que vaya a ocurrir alguna vez. Lo que sucede es que «... los conceptos de neutralidad del Estado y libre competencia conducen, entre otras cosas, a una acentuación de la desigualdad de la sociedad. Si la sociedad se caracteriza, como siempre lo ha hecho la sociedad chilena, por una gran desigualdad económica, política y social, la pasividad del Estado y la libertad económica conllevan una concentración altísima del poder económico. El concepto neoliberal de libertad significa, en este contexto, la libertad del zorro en el gallinero. En efecto, la reducción generalizada del consumo, la inversión y el empleo, han configurado una inmensa expansión de la pobreza, lo que no ha sido compensado por ninguna política pública ad hoc.

Uno de los principales factores que han influido en esto es que, tal como dijimos con anterioridad, las políticas de ajuste no han sido sólo eventuales medidas de corto plazo, sino que se han constituido en la nueva orientación de una política económica de futuro, uno de cuyos principales postulados lo conforma la reducción del papel del Estado. Por otro lado, los países subdesarrollados han debido plegarse a los dictámenes de los organismos financieros internacionales y a los intereses de las élites empresariales y tecnocráticas latinoamericanas estrechamente vinculadas a los procesos de transnacionalización de la economía, lo cual ha limitado gravemente la capacidad de maniobra de las políticas económicas nacionales, sobre todo en términos de la obligada reducción del gasto social a cambio del apoyo económico internacional.

La estimación de la pobreza hecha por la CEPAL para 1987 indicaba que el 44,4% de la población chilena se encontraba por debajo de la línea de pobreza, mientras que en 1970 era sólo del 20%. Por su parte, la población en situación de indigencia llegaba en 1987 al 16,8%, mientras que en 1970 bordeaba el 9%. En términos absolutos, esto significa que en 1987 habían 5.493.000 personas en situación de pobreza y 2.081.000 de ellos eran indigentes.

En términos de distribución geográfica, del total de la población urbana, el 26,4% eran pobres no indigentes y el 16,1% indigentes; en el ámbito rural, por su parte, el 32% eran pobres no indigentes y el 19,8% indigentes, con lo cual podemos concluir que la pobreza se agudiza en el campo, en ambas categorías. Si desagregamos aún más estas cifras, y examinamos la situación de las regiones, notamos que los menores índices de pobreza se encuentran en la undécima y duodécima regiones; en esta última, el índice no alcanza al 20% de la población regional. Por el lado contrario, las más altas cifras están representadas por la Novena (60%) y la Octava (55%) regiones, seguidas de cerca por la Región Cuarta. Los estudios hechos en 1987 esperaban que estas cifras disminuyeran significativamente con la llegada del gobierno democrático, especialmente producto del aumento del salario mínimo, las jubilaciones y las pensiones, así como el crecimiento económico sostenido, que eventualmente producirían efectos en el ingreso y consumo agregados. Sin embargo, para 1990, la CASEN cuantificó un 34,6% de hogares pobres, contra los 38,1% de 1987, pero que representaba más del doble de la cifra alcanzada en 1970, de 17%. Hay consenso en afirmar que el mejoramiento de estos indicadores se ha debido a la aplicación, por parte del gobierno de la Concertación, de tres tipos de medidas:

- a) Por un lado, la reforma tributaria, destinada a solventar de alguna manera la gran deuda social originada en el gobierno militar. Esta reforma tuvo un carácter político, en tanto el gobierno no poseía mayoría parlamentaria como para hacer de ella materia de ley y porque se buscaba generar un consenso que

no afectara la estabilidad de la economía, despertando recelos en los sectores empresariales. El acuerdo logró «el aumento de la tasa tributaria a las utilidades devengadas de las empresas al 15% por un período de cuatro años, el aumento del IVA del 16 al 18% y la mantención de la tributación sobre renta presunta de algunos sectores productivos (entre ellos, la agricultura). El gobierno se comprometió a que los mayores recursos fiscales obtenidos se dedicarían exclusivamente a los programas sociales».

- b) La reforma laboral, efectuada en el marco de una gran convocatoria que contempló el llamado a las entidades más representativas de los trabajadores y los empresarios. Los primeros se comprometieron a reconocer la legitimidad de la propiedad y la inversión privada como bases del sistema económico, la necesidad de estabilización y la desideologización de las negociaciones sindicales; los segundos, aceptaron reconocer la legitimidad de las organizaciones sindicales y de las negociaciones de éstas, la necesidad de la equidad en la distribución de los frutos del crecimiento y la necesidad de ajustar el salario mínimo, las pensiones y las asignaciones familiares.
- c) Las transferencias de ingresos a través de las políticas sociales. Se aumentaron también los recursos asignados a salud, vivienda y educación y se crearon nuevos programas, como es el caso del FOSIS o el Chile Joven, por ejemplo, en la creencia de que la mejor alternativa para derrotar la pobreza es mediante el desarrollo de la capacidad productiva de los propios afectados.

El conjunto de estas tres medidas redundaron en un aumento significativo del gasto social, que creció 21% en términos reales. Por otro lado,

aumentaron también los recursos monetarios de los sectores más pobres, debido tanto a los efectos redistributivos de la nueva política social como al aumento de los ingresos del trabajo.

Sin embargo, el crecimiento económico ha sido ineficaz para reducir la pobreza, actuando sólo como mecanismo del mercado. La proporción de hogares pobres permanece todavía superior a lo que era en los años entre 1977 y 1981, y hoy en día uno de cada tres hogares chilenos vive bajo la línea de pobreza. Este hecho no es ajeno a la aplicación del modelo de desarrollo neoliberal en nuestro país, sino que, por el contrario, es una clara consecuencia de él y se deriva directamente de su sesgo eminentemente clasista y del carácter concentrador del crecimiento económico.

Este estado de cosas nos lleva a sostener que la pobreza en Chile está estrechamente relacionada con la estrategia de desarrollo que se implementa en la actualidad y, por lo tanto, con los procesos de modernización en que se ha visto envuelto el país en los últimos años. En efecto, «ya no se trata de un sector tradicional yuxtapuesto al sector moderno y que pueda ser considerado simplemente como obstáculo al desarrollo de éste, sino de una exclusión producida por

la misma modernización».

La modernización de la sociedad chilena, siguiendo el argumento de Norbert Lechner, incluye dentro de sí dos tendencias contradictorias, pero que conviven en perfecta normalidad: por un lado, la dinámica de la integración transnacional y, por el otro, la de marginalización interna. Ambos momentos constituyen hoy en día un imperativo

ineludible para el desarrollo económico, ante la inexistencia de otras alternativas viables.

La lógica de los procesos de modernización nos lleva a integrarnos a los nuevos y cambiantes mercados mundiales y a incorporar las innovaciones tecnológicas al desenvolvimiento diario

*«La pobreza en Chile está estrechamente relacionada con la estrategia de desarrollo que se implementa en la actualidad y, por lo tanto, con los procesos de modernización».*

de los negocios, las comunicaciones e incluso la vida doméstica. Funciona regida por las leyes de la optimización, la productividad y la eficiencia, todos ellos principios que no quedan reducidos a una operatoria instrumental-económica, sino que se estatuyen en los elementos normativos en virtud de los cuales debería operar el conjunto de los procesos sociales (las relaciones laborales, los medios informativos, el deporte, etc.). Se los acepta como valores culturales a los cuales debería tender el conjunto de la sociedad y, por lo tanto, sus consecuencias nefastas (los procesos de marginalización que genera) son considerados

como males menores, que no se desean, pero que se aceptan. Por lo tanto, no hay que repudiar la exclusión; hay que atenuarla.

Como lo hemos señalado anteriormente, una de las principales consecuencias de la transnacionalización es la segmentación que produce en el mercado interno, la que opera principalmente a través de la discriminación y la diferenciación entre sectores más o menos internacionalizados, lo que complejiza aún más la tradicional desigualdad estructural de nuestra sociedad. Conviven, en un mismo país, una élite completamente mimetizada con un estilo de vida foráneo, con sectores completamente excluidos del mercado formal de trabajo y condenados a desempeñar oficios desprotegidos y mal remunerados.

Sin embargo, ya no estamos hablando de una sociedad dual tal como la entendía la teoría clásica, es decir, como la convivencia, al interior de un país, de un sector moderno y otro tradicional. «Hoy en día, los sectores excluidos comparten el modo de vida moderno. Son marginales, no por sus valores y aspiraciones, sino en relación al proceso de modernización que, dado el crecien-

te peso del factor capital (incluyendo la tecnología), es incapaz de integrarlos, generando un desempleo estructural».

*«Los mismos sectores  
excluidos aceptan su  
desintegración como  
inscrita en una especie de  
ley natural o, en el lado  
opuesto, como algo  
completamente  
transitorio, pero  
desligando, en ambos  
casos, el problema de su  
raíz social».*

Por tanto, estamos en presencia de un nuevo tipo de exclusión, que es producida por la misma modernización, puesto que «...nuestra sociedad produce pobreza al tiempo que produce mercancías». Se perpetúa así una marginalidad que toma ahora la forma de exclusión al interior de, incorporada al sistema capitalista (regida por su expresión neoliberal), pero de forma pasiva.

La denuncia de esta situación tiende a aparecer cada vez también como más marginal al sistema,

considerando que, como dijimos anteriormente, la modernización adquiere un tono normativo que impone su operación sin posibilidad de crítica. Es más: los mismos sectores excluidos aceptan su desintegración como inscrita en una especie de ley natural o, en el lado opuesto, como algo completamente transitorio, pero desligando, en ambos casos, el problema de su raíz social.

La no aceptación de la modernización queda fuera como posibilidad por dos motivos: por razones económicas, dado que existe como única alternativa viable de desarrollo integrado al comercio internacional; y por razones culturales, puesto que adquiere un status de valor cultural aceptado incluso por quienes sufren sus efectos. De hecho, el mismo discurso sobre la pobreza emerge en nuestro país sólo como consecuencia directa de la transformación del aparato estatal, toda vez que éste define que su tarea debe quedar reducida exclusivamente a solventar la situación de aquel sector de la población que se encuentra incapacitado para acceder al mercado y cumplir cabalmente los principios de libertad

individual e igualdad de oportunidades. Con esto se deja de lado el discurso un tanto más totalizador que había tenido el aparato estatal y también el intelectual, que hasta hacía algunos años atrás apelaba al ámbito del trabajo en general o a la clase trabajadora como un todo. Hasta ese año, el discurso político y social apuntaba en una dirección completamente distinta, que estaba guiada por la apelación a la clase trabajadora como un todo y al entendimiento de ellos en el ámbito de desigualdad, vale decir, en relación con el conjunto de la sociedad.

El concepto de pobreza altera completamente esta concepción, pues está definido a partir de la barrera que «discrimina a aquéllos que no disponen de los ingresos suficientes

para satisfacer sus necesidades básicas», pero dejando intacta la relación de los pobres con el resto de los grupos sociales, dimensión sólo aprehensible si introducimos un concepto como el de desigualdad en una sociedad.

Este nuevo discurso sobre la pobreza no es arbitrario ni menos aún, neutro. Sirve perfectamente a un enfoque sobre la marginación que deja intacto el problema de la distribución de los recursos y, además, ayuda a implementar políticas sociales, cuyo eje rector lo constituye la focalización, es decir, la atención a grupos específicos, delimitados, dibujados con precisión y eficiencia.

## LOS DESAFÍOS PARA EL TRABAJO SOCIAL

Las reflexiones anteriores sólo pretenden ser una primera aproximación al tema de la pobreza. Su carácter inicial y tentativo no tiene tanto que ver con una carencia de investigaciones sobre la temática, sino de investigaciones hechas desde el Trabajo Social, cuestión que no deja de ser paradójica, si tenemos en cuenta que la profesión ha

estado tradicionalmente ligada a la intervención en situaciones de carencia y, por lo tanto, ella ocupa un espacio privilegiado que le permite acercarse al problema vinculando sus consecuencias con las formas en que éstas son experimentadas por los sujetos, por señalar sólo un ámbito posible de reflexión.

*«El desafío actual del Trabajo Social pasa por aventurarse en el mejoramiento de las formas de interpretación de la realidad social para, desde allí, mejorar sus modalidades de intervención».*

Si bien no podemos postular la inmediatez o la continuidad entre el quehacer práctico y la producción de conocimientos, por lo menos sostenemos que los propios objetivos de cambio que el Trabajo Social postula para la realidad social sólo son factibles de lograrse en la medida en que profundicemos en el campo teórico. En específico, afirmamos que el desafío actual del Trabajo Social pasa por aventurarse en el mejoramiento de las formas de interpretación de la realidad social para, desde allí, mejorar sus modalidades de intervención.

En concreto, sería deseable aportar con una mirada que dé cuenta de la complejidad creciente de los procesos sociales y, en términos de la pobreza, que contribuya a despejar las múltiples interrelaciones que se dan entre las tendencias globales de la sociedad y la diferenciación creciente de los fenómenos particulares. En definitiva, contribuir al conocimiento de las distintas modalidades de ser pobre que hoy existen, así como a la comprensión de la manera en que el problema afecta a los distintos sujetos sociales, los diferentes grupos etéreos, los nuevos grupos emergentes, entre otros. El Trabajo Social puede ser un excelente vínculo entre estos dos ámbitos (el de la globalidad y el de la diferenciación) y puede ayudar a despejar una situación que ya no puede ser entendida con conceptos homogeneizadores y globalizantes. Hay que indagar en lo específico de la pobreza y, desde allí, elaborar propuestas de solución.

## BIBLIOGRAFÍA

- BAÑO, Rodrigo: «La transformación económico-social de Chile contemporáneo». En: Revista Proposiciones, N° 24. Agosto de 1994.
- BENGOA, José: «La comunidad perdida». En: Revista Proposiciones, N° 24. Agosto de 1994.
- BRUNNER, José Joaquín; BARRIOS, Alicia; CATALAN, Carlos. Transformaciones culturales y modernidad. FLACSO; Santiago de Chile, 1989
- CASTAÑEDA, Tarsicio: Para combatir la pobreza. Política social y descentralización en Chile durante los '80. Centro de Estudios Públicos. Santiago de Chile, 1990.
- CEPAL: Equidad y transformación productiva. Santiago de Chile, 1992.
- CEPAL: La pobreza en Chile en 1990. CEPAL; Santiago de Chile. Diciembre de 1991.
- CEPAL: Panorama social de América Latina. Santiago de Chile, 1994.
- CEPAL: «Una estimación de la magnitud de la pobreza en Chile, 1987». En: Colección Estudios CIEPLAN, N° 31. Marzo de 1991.
- CEPAL: Desarrollo a escala humana. CEPAL; Santiago de Chile, 1986.
- CLERC, Denis: «Los nuevos excluidos». En: Revista Ajo Blanco, N° 45. España, Octubre de 1992.
- DE VYLDER, Stefan: «Chile 1973-1987: los vaivenes de un modelo». En: GARCIA, Rigoberto (compilador). Economía y política durante el gobierno militar en Chile, 1973- 1987. F.C.E.; México, 1987.
- DIAZ, Alvaro: «Estructuras y movimientos sociales. La experiencia chilena entre 1983- 93». En: Revista Proposiciones, N° 22. Agosto de 1993.
- DIAZ, Alvaro: «La reestructuración industrial autoritaria en Chile». En: Revista Proposiciones, N° 17. SUR; Julio de 1989.
- ELGUETA, Gloria: «La transición de los comunicadores: voces, coros y guiños». En: Revista Proposiciones, N° 24. Agosto de 1994.
- ESPINOZA, Vicente: «Modernidad, comunidad, asociatividad». En: Revista Proposiciones, N° 24. Agosto de 1994.
- FAJNZYLBBER, Fernando: «La economía neoindustrial en el sistema centro-periferia de los ochenta». En: Pensamiento Iberoamericano, N° 11. Enero- Junio de 1987.
- FAJNZYLBBER, Fernando: «Industrialización en América latina: de la «caja negra» al «casillero vacío». Comparación de los patrones contemporáneos de industrialización. En: Cuadernos de la CEPAL. Santiago de Chile, 1990.
- FOXLEY, Alejandro: «Experimentos neoliberales en América Latina». En: Colección Estudios CIEPLAN, N° 7. Marzo de 1982.
- FFRENCH-DAVIS, Ricardo: «Desarrollo económico y equidad en Chile: herencias y desafíos en el retorno a la democracia». En: Colección Estudios CIEPLAN, N° 31. Marzo de 1991.
- GARCIA HURTADO, Alvaro: «Las orientaciones de la política social». En: Revista Estudios CIEPLAN, N° 31. Marzo de 1991.
- GARRETON, Manuel Antonio (editor): Propuestas políticas y demandas sociales. FLACSO; Santiago de Chile, 1989
- GOMEZ, Sergio (editor): La realidad en cifras. FLACSO/INE/UNRISD. Enero de 1992.
- GOÑI, José: «Deuda externa en Chile». En: GARCIA, Rigoberto (compilador): Economía y política durante el gobierno militar en Chile, 1973- 1987". F.C.E.; México, 1987.
- GRIFFITH-JONES, Stephany: «El contexto internacional para las políticas macroeconómicas y sociales en Chile». En: Colección Estudios CIEPLAN, N° 31. Marzo de 1991.
- LARRAIN, Felipe: «Desarrollo para Chile en democracia». En: LARRAIN, Felipe: Desarrollo económico en democracia. Ediciones de la Universidad Católica de Chile; Santiago de Chile, 1987.
- LAVIN, Joaquín: Chile: Revolución silenciosa. Zig- Zag; Santiago de Chile, 1987.
- LECHNER, Norbert: ¿Son compatibles modernidad y modernización? El desafío de la democracia en América Latina. Documento de Trabajo, FLACSO, N° 440. Santiago de Chile, marzo de 1990.
- LEIVA, Fernando Ignacio: «Equilibrios macroeconómicos y pobreza en Chile».

- En: Revista Propositiones, Nº 24. Agosto de 1994.
- MAC CLURE, Oscar: «¿Exclusión en Chile? De la integración a la desintegración».  
OIT; Santiago de Chile, 1994.
  - MELLER, Patricio: «Revisión del proceso de ajuste chileno en la década del '80».  
En: Colección Estudios CIEPLAN, Nº 30. Diciembre de 1990.
  - MIDEPLAN: Un proceso de integración al desarrollo. Informe social 90/91.
  - MIDEPLAN: Dimensión y características de la pobreza según CASEN 1990.
  - MOLINA, Sergio: Abriendo caminos.  
CINDE; Santiago de Chile, 1993.
  - MORALES, Juan Antonio; MCMAHON, Gary: la política económica en la transición a la democracia.  
CIEPLAN; Santiago de Chile, 1993.
  - MUÑOZ, Oscar : «Hacia el Estado regulador».  
En: MUÑOZ, Oscar (Editor): Después de las privatizaciones. Hacia el Estado regulador.  
CIEPLAN; Santiago de Chile, 1992.
  - ODEPLAN: Informe Social, 1983. Noviembre de 1984.
  - ORTEGA, Luis: «Los límites de la modernización en Chile. Siglos XIX y XX».  
En: Revista Propositiones, Nº 24. SUR; Agosto de 1994.
  - PINOCHET, Augusto: Visión futura de Chile. Clase magistral del Presidente en la inauguración del año académico en la Universidad de Chile. Abril, 1979.
  - ROSALES, Osvaldo: «El debate sobre el ajuste estructural en América Latina».  
En: ILPES- CEPAL Documento EIN- 62. Enero de 1990.
  - ROSALES, Osvaldo: «Marco externo, estrategias de desarrollo y ajuste estructural».  
En: CEPAL/ILPES/FLACSO/ILDIS/PNUD: Estrategias de desarrollo para América del Sur.  
Bolivia, 1987.
  - SUAREZ SALAZAR, Luis: «Apuntes para un enfoque estructural de la pobreza».  
En: CONTRERAS QUINA, Carlos (Compilador): El desarrollo social. Tarea de todos.  
Comisión Sudamericana de Paz, Seguridad y Democracia; Santiago de Chile, 1994.
  - SUNKEL, Osvaldo: «Capitalismo transnacional y desintegración nacional en América Latina».  
En: Trimestre Económico, Nº 150. Abril- junio de 1971.
  - SUNKEL, Osvaldo: «La crisis social de América latina: una perspectiva neoestructuralista».  
En: CONTRERAS QUINA, Carlos (Compilador): El desarrollo social. Tarea de todos.  
Comisión Sudamericana de Paz, Seguridad y Democracia; Santiago de Chile, 1994.
  - TIRONI, Eugenio: Los silencios de la revolución.  
Editorial La Puerta Abierta; Santiago de Chile, 1988.
  - URMENETA, Roberto: Pobreza y mercado de trabajo. Chile 1988-1990.  
PET; Documento de Trabajo, Nº 83. Santiago de Chile, abril de 1991.
  - VERGARA, Pilar: Auge y caída del neoliberalismo en Chile.  
FLACSO; Santiago de Chile, 1985.
  - VERGARA, Pilar: Políticas hacia la extrema pobreza en Chile 1973/1988.  
FLACSO; Santiago de Chile, 1990.
  - VIAL, Joaquín y otros: «Fundamentos de las políticas macroeconómicas del gobierno democrático chileno».  
En: Estudios CIEPLAN, Nº 30, 1990.
  - Modernizar con todos. Hacia la integración de lo social y lo económico en Chile. Informe de la Misión Piloto del Programa Reforma Social del Banco Interamericano de Desarrollo.  
Enero de 1994.